

ANÁLISIS SOCIO-POLÍTICO Y ECONÓMICO



Teodolina Esquivel - Tobati

ANÁLISIS DE COYUNTURA SOCIOPOLÍTICA

María Lis Rodríguez

El 2003 fue un tiempo de cambios o mejor, de recambios, porque no hubo alternancia en el poder. También se caracterizó por el hartazgo hacia la inoperancia de González Macchi; una espera tensa frente a los comicios generales, a los que sobrevienen muchas expectativas que se van diluyendo a medida que finaliza el año. El presidente electo, prometió todo, pero con sus palabras y su actuar, envía a la ciudadanía señales contradictorias, como al parecer, es su propia personalidad.

Caracterización del año: los tres momentos

El año tuvo tres grandes tiempos políticos, todos ellos con actores en disputa. Durante el primero, el del “hartazgo”, se vivía una crisis profunda de liderazgo. Esta carencia desaparece con las pugnas de las campañas presidenciales, que presentan líderes prácticamente para todos los gustos. Luego de la elección se presenta un largo periodo de parálisis, Nicanor ya nombraba personas para el gabinete, pero aún no gobernaba. Este angustioso alargue culmina el 15 de agosto, dando lugar a un periodo de expectativas, pero también a otro tipo de confrontaciones. No se trata ya de la disputa eleccionaria, ni de la “pulseada” entre un presidente que viene y el que se va, sino de una lucha entre los tres poderes del Estado. Dos de ellos —el Ejecutivo y el Legislativo— se unen contra el Judicial.

“Mano dura”

Tal fue la promesa electoral de Nicanor Duarte Frutos, cuyo triunfo dio continuidad en el poder a la Asociación Nacional Republicana (ANR). La apelación entró en sintonía con la cultura autoritaria fuertemente arraigada en la mente de las y los paraguayos, pero en concordancia con la imagen de hombre nuevo que “vendía” el candidato colorado, un eficaz trabajo de marketing político transformó la mano “dura” en “firme”. A esta promesa se agregó otra: la lucha frontal contra la corrupción. Con ello, Nicanor se diferenció de González Macchi y de sus otros antecesores, que de “correligionarios” —en las internas— pasaron a formar parte de “los incapaces gobiernos anteriores”. No asumir la responsabilidad del pasado ha sido una constante en las campañas políticas de la ANR

desde el inicio de la transición, así como la capacidad de mutar y ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. El resultado ha sido una ininterrumpida victoria, aunque numéricamente van perdiendo votos desde la caída del dictador.

Los “impresentables”

La figura fuerte de Nicanor posibilitó la victoria de la ANR en el Ejecutivo, pero no ocurrió lo mismo en el Poder Legislativo, ya que obtuvo el 32,93% de los votos para senadores. Una de las causas de esto pudo ser la mala selección de candidaturas. La lista fue fruto de negociaciones internas y cada grupo exigió su cuota sin pensar en la idoneidad de quienes proponía. El resultado fue una nómina de “impresentables” que, con una mentirosa pero eficaz estrategia, se ocultaron tras la figura de Evanhy Gallegos, cuya imagen se sustentaba no en la política, sino en una reconocida trayectoria periodística. La candidata número 21, sin posibilidad de ingresar a la Cámara Alta, se convirtió —mediante una hábil propaganda— en la “cara” de la campaña de la ANR para el Legislativo. Sin embargo, la comunicación no puede hacer milagros y el Parlamento quedó conformado con mayoría opositora. De las 45 bancas en la Cámara Alta, Nicanor obtuvo 16 y en Diputados, de 80 curules, logró 37.

PLRA conquista cotos ajenos

La campaña presidencial del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tuvo desaciertos. Al igual que los otros partidos de oposición, los azules no encontraron la forma de quebrar el discurso oficialista para que los electores relacionen a la ANR con los crímenes y el saqueo al Estado practicado por los gobiernos colorados desde 1947.

Esta incapacidad de la oposición no se agota en errores meramente comunicacionales. Tiene varias vertientes, como las relacionadas con la cultura y la práctica política, cuyas derivaciones requieren un estudio específico que dejamos pendiente. El análisis de la campaña del PLRA se dificulta por la carencia de información, en especial sobre cómo se desarrolló en el interior, donde existieron estrategias exitosas, fuera de los grandes medios de comunicación y posiblemente cerca de la ciudadanía. El PLRA mantuvo el poder en el departamento Central y en Concepción; ganó en Caaguazú, tradicional e importante coto del Partido Colorado, al igual que el Alto Paraná, donde los votos también los favorecieron¹. Podríamos aventurar que la lealtad partidaria se rompe cuando el candidato vive en la comunidad y está cerca de los problemas de la gente.

El tercer espacio

Una de las sorpresas en los comicios fue el resultado de los partidarios del general Lino César Oviedo. Sus partidarios se desprendieron de la ANR y formaron el movimiento Unión Nacional de Colorados Éticos (UNACE), que obtuvo con el 13,49% de los votos la misma cantidad de senadores y diputados que el movimiento Patria Querida (PQ) —inaugurado en los comicios—, que obtuvo el 15,2%. El surgimiento de PQ coincide con la casi desaparición del Partido Encuentro Nacional (PEN, obtuvo el 0,57%) que pagó un alto costo por haber permanecido, hasta el final, en el gobierno de González Macchi. El tercer espacio pasó a ser compartido por UNACE, PQ y dos partidos muy pequeños: País

¹ También obtuvo la gobernación de Amambay.

Solidario y PEN. La izquierda, constituida por pequeños partidos, no obtuvo representantes en la estructura de poder, posiblemente debido a que se piensa y actúa en forma marginal.

En cuanto al sistema electoral en sí, algunos sectores ciudadanos criticaron, una vez más, la existencia de listas cerradas y bloqueadas, que atentan contra la libre elección. Las urnas electrónicas fueron la novedad en los comicios y colaboraron con la transparencia del proceso.

Tenemos un presidente

El hecho de que haya un gobernante que gobierne no es garantía de que lo haga bien. Pero indiscutiblemente desde el general Andrés Rodríguez no se tuvo uno que ejerza un fuerte liderazgo como lo hace Duarte Frutos. Su voluntad de conducir al país se ha traducido en algunas acciones que pueden considerarse exitosas, como el incremento de las recaudaciones y el haber mejorado el concepto que la comunidad internacional tenía sobre Paraguay. A su vez, él mismo vende una imagen interesante, ubicándose entre los progresistas, como Lula o Kirchner, aunque no se asemeje ni a uno ni otro. Se reconoce que es un hábil comunicador, con capacidad de desarrollar el discurso que este o aquel auditorio desea escuchar. El problema radica en que, ya lograda la presidencia, continúa en campaña, prometiendo, y la ciudadanía empieza a impacientarse porque quiere acciones ya. Un gesto importante e innovador es que su discurso incorpora el tema de la pobreza. Sus antecesores hablaban de desarrollo sin nombrar la carencia económica que hoy día afecta a casi dos millones de personas.

¿Qué intereses representa? Más allá del buen manejo de su propia imagen, los cambios producidos por el presidente arrojan dudas ¿Cuál es el verdadero Nicanor? Pareciera que, como la Santísima Trinidad, el presidente es “tres en uno”: el “paíno” Nicanor, el Nicanor estadista y el Nicanor integrista.

“**Paíno**”: la clientela más básica se forma con parientes de sangre y emparentamientos por vía del padrazgo. Al pasar ese sistema a la institucionalidad política se convierte en clientelismo, signo que ha marcado el manejo del Estado de los últimos 57 años por un solo partido: la ANR, del cual Duarte Frutos fue presidente.

El paíno Nicanor representa esta vieja práctica. Escogió a una parte de sus colaboradores y colaboradoras con criterios de la más tradicional política clientelista. Antes de cumplir los 100 días de gobierno, algunos fueron acusados o relacionados con hechos de corrupción. Nicanor los destituyó o los “renunció”, pero, fiel al amiguismo, no los juzgó. El Paraguay de instituciones pobres que son fuente de trabajo para la clientela y de altos funcionarios enriquecidos con el uso del poder político tiene dificultades de funcionar en la globalización. Muchos de los conflictos con los países limítrofes, socios en el Mercosur, tienen su causa en la falta de seguridad jurídica. Sin embargo, una parte de las señales dan la impresión de que Nicanor trata de mantener la ilegalidad como forma de funcionamiento del poder real en el país.

Estadista: Nicanor Duarte Frutos es el primer presidente —desde la apertura política de 1989— que no formó parte del entorno stronista. Antes bien, fue parte del seifarismo, opuesto a Stroessner desde 1984. Fue un destacado periodista y un ministro de Educación comprometido con la reforma educativa. Su discurso, en términos generales, es el

de un estadista. Sus señales han ido más allá de las palabras. Nombró a buenos profesionales para el equipo de transición —lástima que no pensó en muchas mujeres calificadas— presidido por el actual ministro de Hacienda, el doctor en economía por la Universidad de Amherst Dionisio Borda, intelectual de izquierda, sin adhesión a ningún partido político. Tiene muchas ideas para reactivar la economía paraguaya. El nombramiento de un intelectual independiente significa una ruptura en la tradición paraguaya. Hasta ahora, si los presidentes nombraban a un ministro no colorado (porque nunca nombraron a una ministra no colorada) lo hacían dentro de un paquete de negociación de cargos a cambio de respaldo político. A eso se suma el nombramiento de Leila Rachid, ministra de Relaciones Exteriores. Es una especialista en el tema: conoce el proceso del Mercosur, el conflicto en Medio Oriente y tiene gran sensibilidad hacia los derechos humanos. Blanca Ovelar sigue al frente de la cartera de Educación y Cultura. Su idoneidad ha quedado demostrada durante el gobierno anterior. A ello se suman asesores de la talla del sociólogo Domingo Rivarola. El Nicanor estadista es un hombre de la modernidad, de la legalidad. A ese Nicanor apuesta la comunidad internacional y es el que mostró legitimidad y poder de convocatoria internacional cuando asumió sus funciones.

Integrista: desde 1992 Paraguay es un país laico, cualquiera de sus habitantes tiene derecho a ser agnóstico, ateo o profesar la religión que crea conveniente. Por tal motivo, llama la atención que Nicanor se ponga incómodo cuando se le pregunta a qué religión pertenece. Su esposa sí responde: desde hace siete años pertenece a la Iglesia Raíces, vinculada a los menonitas, comunidad anabaptista. Nicanor asiste a los cultos de esta iglesia, pero públicamente evita aclarar si pertenece o no al culto. Y precisamente el ocultamiento preocupa, pues en torno a él se tejen historias alarmantes, como la que asegura que Nicanor estaría priorizando la religión a la Constitución Nacional, y uno de los principales criterios para elegir colaboradores y colaboradoras sería que pertenezcan a la Iglesia Raíces. Lo que sí resultaría temible es que el presidente dispusiera que instituciones públicas, cuya función es dar cumplimiento a artículos constitucionales, pasen a depender del despacho de la Primera Dama. Ese podría ser el destino de instituciones claves para un país incluyente, como la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia y hasta la Secretaría de Acción Social. Si el despacho de la Primera Dama se dedica a hacer caridad, puede ser útil, pero no tiene derecho a disponer de fondos públicos y subordinar a reparticiones oficiales. Quizá por lo desconocido, quizá porque estamos viviendo un tiempo de renacimiento, de integrismos —con el Corán y la Biblia en la mano—, este tercer Nicanor sea muy preocupante.

¿Quién triunfará? El *paíno* le gana al estadista porque éste no puede llevar adelante sus planes si se mantienen los vínculos de la política con la ilegalidad organizada, manejándose de forma clientelista y patrimonialista, pero pierde con el integrista que se rige por principios religiosos con mandamientos como “no matarás y no robarás”. El integrista a su vez pierde con el estadista porque la modernidad se rige por normas que la sociedad y sus representantes deciden, y no por lo dispuesto en libros sagrados inmutables. De los tres Nicanores, esperamos que gane o que crezca el estadista, en detrimento del *paíno* y del integrista².

² Versión resumida y libre del artículo publicado en el Informativo Mujer del Centro de Documentación y Estudios (CDE), Asunción, mayo-junio de 2003

Necesarios consensos

Resulta claro que la administración de Duarte Frutos sola no podrá llevar adelante las reformas necesarias. La ciudadanía espera mucho; su partido y las mafias organizadas, poco, pues no les conviene el cambio. El presidente entiende que necesita superar la crisis política y la económica mediante acuerdos amplios. Por tal motivo, se ve obligado a buscar alianzas y pactos políticos con la oposición y sectores del poder económico. Nicanor habla con todos. Es necesario ganar legitimidad y consensos, sobre todo frente a su partido, sumido en una crisis interna profunda que probablemente será superada, aunque no sabemos cuál será el costo. La oposición y los sectores de gremios empresariales acompañan y apoyan la iniciativa presidencial. La sociedad civil está de espectadora, y en algunos casos muestra un excesivo recelo, especialmente las organizaciones sindicales y campesinas, pues sus integrantes no ven indicadores claros de que Nicanor vaya a cumplir sus promesas electorales. En cuanto a conflictos sociales, exceptuando la huelga de docentes, no han ocurrido hechos de gran relevancia.

Renovación de la justicia

A poco tiempo de asumir, Nicanor capitaliza el descontento ciudadano hacia la administración de la justicia y promete “pulverizar la Corte Suprema”. Convoca a las directivas de los partidos políticos y logra conformar una alianza entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, una forma de acuerdo que no es nueva, pues en 1999 la unión del Poder Judicial con el Legislativo expulsó al ingeniero Raúl Cubas del Poder Ejecutivo. Es un nuevo pacto desde arriba y usa una forma muy desprolija. Previo al juicio político, no se ha ofrecido argumentación consistente que demuestre que la remoción de los altos magistrados contribuirá con el mejoramiento de la justicia paraguaya. Tampoco se nominaron a posibles reemplazantes. La solvencia y ética de las personas es un componente fundamental cuando las instituciones son débiles porque garantizan la transparencia. Y la institucionalidad paraguaya sigue adoleciendo de una gran fragilidad.

Nicanor instaló el tema de la Corte Suprema en su agenda dentro del capítulo de lucha contra la corrupción y el proceso se lleva a cabo a su medida. Los representantes de los partidos de oposición que tenían sus proyectos de transformación integral del Poder Judicial terminaron aceptando la propuesta del presidente: cambiar gente con un sistema de cuoteo. Metodología que tampoco es nueva. La actual Corte es fruto de un pacto - muy polémico en su momento- hecho en 1995 entre el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy y el líder liberal Domingo Laíno. Aquella corte, bastante equilibrada y de nivel, se fue deteriorando con el fallecimiento de dos magistrados y posteriormente la renuncia de otro. En su reemplazo ingresaron solo colorados³. La partidización del Poder Judicial se intensificó en los últimos años, originando que el Consejo de la Magistratura ya no elija las ternas, sino que apruebe las elaboradas por los partidos políticos.

A diferencia de aquel momento, hoy la ciudadanía está más atenta y también más escéptica. La forma en que surgió y se lleva a cabo el proceso hace suponer que el cambio será de personas y no de estructura.

³ Los doctores Bonifacio Ríos Avalos, Antonio Fretes y Víctor Nuñez.

Suma de complicidades

Nuestra ubicación en el globo terráqueo hace que estos últimos días del año sean difíciles de soportar. Pero más duro de soportar es que el 2003 finaliza sin que se avizore un mejor desempeño de las fuerzas de seguridad y de la misma justicia. La acusación a los ministros llevados a juicio político ha mostrado en forma pública hechos delictuosos —con posibilidad de repetirse— que degradan a la máxima institución jurídica. Estos ilícitos también afectan al Poder Legislativo, que desde la transición sufrió un alto nivel de deterioro. Detrás de las grabaciones clandestinas que esporádicamente son entregadas a la prensa, cuyos protagonistas son jueces o legisladores venales, se ocultan grupos de poder y su análisis se ve dificultado porque, como se señaló en el análisis del año pasado, continúa el “desconocimiento de las formas en las que opera la mafia, de cómo está organizada y cuáles son sus relaciones con quienes manejan las instituciones de la República”. No obstante, existen señales de que se estarían armando dos modelos. En el primero la mafia pone a sus amigos en las instituciones y en el otro sus mismos integrantes ocupan el poder. Obviamente, este proceso necesita de gente y estructuras corruptas para prosperar.

Inseguridad creciente

La falta de una política criminal y de una eficiente acción de las fuerzas de seguridad han generado en la ciudadanía una sensación atemorizante y de desamparo. De 1990 al 2000, los delitos denunciados aumentaron en más del 100%. En Asunción, del total, solo el 5% es denunciado a la Policía Nacional. El 82,3% no confía en las instituciones de seguridad nacional. Existe una sensación de riesgo y éste es real. Pero las acciones destinadas a penalizar los delitos se llevan a cabo sin tocar la estructura delictiva: juicio para los peces pequeños, impunidad para los grandes.

Si bien la pobreza y las desigualdades contribuyen al aumento de los delitos, lo que se ha dado en llamar “criminalización de la pobreza” en la práctica se está utilizando como “criminalización de la protesta”. Ya no es tanto la pobreza lo que se criminaliza, sino la organización y protesta de los pobres. La pobreza no molesta mientras no reclame, y cuando lo hace es necesario desarticularla y deslegitimarla. Las organizaciones campesinas denunciaron que desde 1989 murieron 79 dirigentes. Cada vez más, las manifestaciones son reprimidas y el amedrentamiento y las amenazas a comunidades y organizaciones es moneda común. Se la practica en diferentes lugares del país sin que ninguno de los responsables haya recibido castigo por estos hechos.

Cambios, ¿hasta dónde?

En teoría, cada partido es una bancada. No obstante, en los últimos periodos hemos visto la conformación de “bancaditas”, pequeños grupos que condicionan su apoyo a cambio de prebendas o de venta directa de votos. El fraccionamiento incluso responde más a corrientes internas que a la dirección institucional de los partidos. Nicanor lo sabe. Han resultado evidentes sus dificultades para controlar a su propio partido y sus bancadas. Sus negociaciones deberán ser por partida doble: al interior de la ANR y fuera del oficialismo. Para esto último le bastará con romper uno de los sectores, negociando con individualidades para lograr la aprobación de proyectos. De cara a la historia reciente,

una pregunta queda flotando en el aire: ¿repetirán los parlamentarios los mismos vicios?

Las expectativas del 2003 no se han agotado, como tampoco la confianza en el nuevo gobierno. Una encuesta publicada en el diario Última Hora indica que el 50,3% cree que el desempeño del nuevo Poder Ejecutivo es bueno; el 10,1% cree que es muy bueno; el 29,5%, regular; y el 8% y el 2,2%, respectivamente, cree que es malo y muy malo. El Ejecutivo sigue buscando apoyos, algunos han sido rubricados, pero muchos otros no. La desconfianza persiste. Nicanor lanza señales que no son claros signos de cambio real. Esta es la otra pregunta clave que queda flotando: ¿se adviene un nuevo *gatopardismo* similar al de 1989: cambiar para no cambiar?

La gran inquietud que se plantea frente a la coyuntura es si el nuevo gobierno hará los cambios necesarios para eliminar la dinámica perversa de la gestión del estado y los ajustes estarán dirigidos al estancamiento de un régimen de justicia social, garantizado por un sistema económica reestructurado para el efecto.

EL SISTEMA ECONÓMICO HEREDADO

Nuestro sistema económico nacional se encuentra desmantelado por la acción de la crisis económica, profundizada en el periodo 2002 - 2003, dentro de una tendencia de estancamiento global que se evidencia desde 1996 y de retroceso del nivel promedio de vida de la población medido en términos del ingreso nacional y el producto interno bruto por habitante; del aumento del desempleo, el aumento del número de pobres y pobres extremos y de la profundización de la pobreza.

Estrechamente ligado a lo anterior, tenemos un Estado igualmente desmantelado por la pésima gestión de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de la mayoría de sus instituciones, la acción de las sucesivas crisis financieras y sus efectos en la disminución de los recursos financieros públicos y privados, la corrupción, que ha llegado a niveles exorbitantes, y el aumento del endeudamiento público interno y externo en este contexto.

En la intervención económica del Estado y su desmantelamiento hay que considerar y analizar el peso que han tenido, por un lado, la concepción neoliberal preponderante en los años noventa, que no se constituyó, como en varios país de la región, en una idea - fuerza reestructuradora y disciplinaria hacia las tendencias del sistema económico mundial, sino en desorientadora de su actuación real. Bajo su efecto, se transitó causas informales de gestión no explícitos ni debatidos, que suponen la

resistencia legítima a un nuevo modelo desestimado, pero que sobre todo se centró en el uso y abuso de los recursos públicos para la apropiación y especulación privada, ya sea a través del acceso directo a la administración de dichos bienes como del tráfico de influencia política.

Por otro lado, el daño causado trasciende el aspecto de pérdidas económicas y el retraso social considerables. Incluye además el vaciamiento de todo sentido ético, de responsabilidad personal, profesional y política de la función pública ante la sociedad como los que evidencian el caso de los bancos y financieras intervenidos y cerrados, Multibanco y las empresas vinculadas, la corrupción en el IPS, el fraude en las cuentas del Poder Judicial en el Banco Central del Paraguay (BCP), entre otros.

Esta situación explica que los programas de gobierno perfilados por los candidatos presidenciales hayan coincidido en enfatizar en la necesidad de cambios sustanciales en el sistema político, económico y social en crisis, incluso en el caso del candidato del partido oficial, y que, paradójicamente, no sólo se halla en función de gobierno desde hace más de cincuenta años, sino que volvió a ganar las elecciones con sus propuestas de cambio.

De ahí que la coyuntura económica del año 2003 se caracteriza por una mezcla de los hechos socioeconómicos y políticos recientes registrados en la última fase del gobierno anterior; de cierta dosis de desconfianza y expectativa, a la vez, hacia las promesas del nuevo, particularmente, porque los cambios en el sistema económico están estrechamente vinculados con los cambios en el sistema político, que ha dado estabilidad en el poder al Partido Colorado, en un contexto subregional favorable y con grandes afinidades en el último año..

20

No obstante estas expectativas, los primeros tres meses del nuevo gobierno han puesto a prueba tanto su voluntad como sus formas de hacer los cambios, y el consenso inicial ganado.

AUMENTA LA POBREZA URBANA Y RURAL

El aumento de la pobreza urbana y rural constituye uno de los aspectos más resaltantes de la situación social en el Paraguay, como efecto tanto del comportamiento de la actividad económica en los últimos años, como de la forma o modelo en el que se desenvuelve el sistema socioeconómico y político nacional.

Las estadísticas oficiales sobre el nivel de pobreza alcanzado en el Paraguay a fines del año 2002¹ indican que el número total de pobres, debido a que sus ingresos se hallan por debajo del costo de la canasta básica de consumo, es de 2.689.717 habitantes, equivalentes al 48.8% del total de la población, y que los pobres extremos

¹ Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC, 2003). Encuesta Permanente de Hogares 2002. Evolución de la pobreza y la desigualdad. Asunción.

(con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de alimentos) constituyen el 24.7%, prácticamente la mitad del total².

También indican que en las zonas urbanas el número de pobres es mayor que en las rurales (1.444.596 habitantes o el 46.1% del total) pero que en éstas, la pobreza es más extendida y profunda porque afecta al 52% de la población zonal (1.245.121 habitantes) y el promedio de ingresos de los pobres de estas zonas cubre sólo la mitad del costo de la canasta básica (51%) mientras que el de Asunción cubre el 61% y el del resto de las zonas urbanas, exceptuando las del departamento Central, el 58%.

Un aspecto muy llamativo de los indicadores de la situación de pobreza encontrados a fines del 2002 es la referencia a la expansión y profundización de la pobreza en las zonas urbanas del departamento Central, pues en ellas se concentraría el mayor número de pobres de las zonas urbanas (739.830 habitantes o el 58% del total departamental) y el nivel de ingreso de los pobres alcanzaría a cubrir sólo el 52% del costo de la canasta básica de consumo, casi igual que el referido para los pobres de las zonas rurales.

El considerable aumento de los indicadores de pobreza y pobreza extrema en el último año ha llamado la atención de algunos analistas sociales locales, que reclaman a la DGEEC el reconocimiento de tales niveles de pobreza en la coyuntura de fines de 2002³.

Para la DGEEC, las causas del aumento en la pobreza y pobreza extrema son el receso económico a partir de 1999, el aumento del desempleo abierto, el aumento de la inflación, la devaluación del guaraní frente al dólar, entre otros⁴.

AUMENTAN EL DESEMPLEO Y EL SUBEMPLEO Y DISMINUYEN LOS SALARIOS RELATIVOS

El aumento del desempleo y subempleo es uno de los factores que explica el aumento del número de pobres y de pobres extremos registrados. En el período 2001 - 2002, el desempleo abierto aumentó de 7.7% a 10.8% a nivel país, pero en las zonas urbanas del departamento Central y del resto urbano, exceptuando Asunción, dicho aumento fue mayor al pasar del 12% al 18% y del 8.5% al 13%, respectivamente, lo cual se vincula con los indicadores de pobreza en dichas zonas.

A fines de 2002, la subocupación afecta a una cuarta parte de la población ocupada de 10 años y más (568.045 personas), y la subocupación invisible (integrada por los que trabajan 30 horas o más a la semana y perciben un ingreso mensual inferior al salario mínimo legal vigente) al 65% de esta última.

² Ver cuadro de indicadores socioeconómicos 2002 - 2003, que se presenta más adelante.

³ Ya en la Encuesta Integrada de Hogares 2000 - 2001, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) había referido niveles más elevados de pobreza y extrema pobreza en el Paraguay que los referidos por la DGEEC.

⁴ DGEEC. Op. cit.

El salario mínimo legal fue ajustado en 11% en términos nominales en febrero de 2003 en el contexto de un aumento de precios al consumidor que en dicho mes había llegado a un porcentaje interanual del 20%, para descender paulatinamente desde mayo pasado. Medido en dólares corrientes, promedio mes de junio pasado, dicho monto equivale a 156 dólares mensuales.

Atendiendo la vigencia parcial del salario mínimo y la precariedad del empleo de por lo menos una cuarta parte de la población ocupada, se explica la caída de los niveles de ingreso de grandes franjas de la población urbana y rural.

HACIA UNA LENTA RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS

Frente a la caída de la producción interna de bienes y servicios en el 2002, estimada en un -2.3%: a precios constantes respecto de 2001 y dentro de un ciclo de estancamiento que arrancó en 1996, los pronósticos de la nueva conducción de la política económica están en un compás de espera que se establezca un diagnóstico y algunas medidas eficaces de contención de la crisis heredada.

Los indicadores de la producción refieren a un buen desempeño de la producción y la cotización internacional de los principales rubros agrícolas de exportación: la semilla de la soja, la fibra de algodón y el maíz en la temporada 2002 - 2003. Además, se espera una leve recuperación de la rama de la construcción, particularmente de las obras viales en terminación a cargo de la inversión pública, y la construcción de viviendas populares basada en donaciones de carácter no reembolsable de la cooperación internacional de Taiwán.

EL SINCERAMIENTO DEL SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

En los primeros meses del año, la decisión del Ministerio de Hacienda de retirar los depósitos del sector público de los bancos comerciales y canalizarlos a la banca pública le permitió superar la trampa en la que se manejaba la política de estabilización monetaria, y en particular del tipo de cambio del guaraní con el dólar.

Lo anterior sucedió porque los recursos del sector público depositados en dichos bancos eran utilizados, en su mayor parte, para especular con el tipo de cambio, con lo cual se lo elevaba artificialmente afectando los niveles de inflación de los precios internos y los recursos privados y públicos destinados al pago de las deudas y compras en dólares.

Por otro lado, la intervención y cierre de Multibanco evidenció nuevamente la constante de los bancos intervenidos y liquidados desde 1995, como ser:

- la considerable gravitación de los depósitos del sector público y del Instituto de Previsión Social (IPS), en particular, en sus operaciones, y el pago del tráfico de influencia en las decisiones de dichos entes respecto del destino de sus depósitos;

- la creación de empresas vinculadas con el negocio financiero para captar, a través de diversos instrumentos financieros innovadores, los recursos del público y negociarlos en el circuito financiero internacional especulativo de alto riesgo; y
- ante la pérdida en dicho mercado, lograr la asistencia financiera del BCP para adjudicarla posteriormente, en el mayor monto posible, a miembros del directorio, familiares y prestanombres, para “salvar en efectivo” la liquidación de los activos físicos por los acreedores, incluyendo al BCP. Para la ciudadanía es difícil dimensionar las cifras en cuestión. En el caso del IPS, los depósitos congelados en los bancos intervenidos y liquidados suman más de 890 mil millones de guaraníes, o sea más de 142 millones de dólares al cambio actual.

En el caso de la administración de las cajas de jubilación, obligatorias, de bancarios y del sector público, las novedades no son alentadoras. La primera aclaró que sus depósitos están resguardados en el exterior.

Igualmente, el fraude descubierto en junio en torno a las cuentas judiciales en el BCP, que se estiman en alrededor de 2.500 millones de guaraníes, no sólo hablan de la vulnerabilidad de los controles de dicha institución, sino de la corrupción en el Poder Judicial.

Estos hechos obligan al nuevo gobierno al sinceramiento del sector institucional monetario y fiscal, de las políticas públicas y de la seguridad social, para establecer el sistema de financiamiento del sector público vinculado a los programas de acción, basado en la identificación de las fuentes de recursos institucionales y los mecanismos de su operacionalización con criterios racionales y transparentes de gestión, monitoreo y evaluación. La implementación y la obtención de resultados de la gestión de los programas públicos están condicionados a un nuevo sistema de financiamiento local.

LAS EXPECTATIVAS DE CAMBIO DEL MODELO DE DESARROLLO

Las expectativas de la ciudadanía están asociadas con las propuestas de cambio en la gestión de la cosa pública por parte del nuevo gobierno, para que la crisis no prive los recursos y socialice las pérdidas del Estado. Asimismo, con la generación de empleos productivos e ingresos para los jóvenes y los profesionales calificados sin más requisitos que la voluntad e idoneidad para los cargos disponibles. Igualmente, con la intervención del Estado para garantizar la equidad en la generación de oportunidades de acceso a los servicios educativos, sanitarios, de vivienda y de generación de condiciones de subsistencia y crecimiento para los sectores mayoritarios.

Ello implica cambiar el carácter oligárquico de la estructura social, según la propia caracterización del nuevo presidente, por una base social ancha que sustente la estructura del Estado Social de Derecho, al mismo tiempo en que se garantiza a esta mayoría el ejercicio de sus derechos sociales.

La centralidad del desarrollo social - cultural, requiere de su articulación con el desarrollo económico y político - institucional, definiendo al desarrollo no sólo como el logro de las metas, sino además como la interacción dinámica de la sociedad civil y política en la búsqueda de dichos logros, y para poner en marcha procesos de superación de las estructuras heterogéneas y desiguales heredadas por otras pluralistas y equitativas en todos los órdenes de la vida social global.

Este análisis y las expectativas observadas se sustentan en una concepción de la economía que marca diferencias con aquellas que sostienen que toda economía es tiránica para justificar la explotación y la sobreexplotación de grupos humanos, regiones y países entre sí. Consideramos que la economía, como toda actividad humana y social, tiene su lógica, su racionalidad, y que ella cambia según el qué, para qué y cómo se produce, distribuye, intercambia, consume y acumule la riqueza material en la sociedad y el Estado, uno de los mediadores más gravitantes en nuestro proceso local, dentro del contexto regional y mundial concreto.

La gran inquietud que se plantea de cara a la presente coyuntura es si el nuevo gobierno, que ha demostrado tener conciencia de la dinámica perversa de la gestión del Estado y de ciertos sectores privados que hemos referido, actuará efectivamente para cambiar dicha dinámica, y si los ajustes que se hagan en la organización y funcionamiento del Estado serán en dirección al establecimiento de un régimen de justicia social garantizado por un sistema económico reestructurado para el efecto, en el marco de la vigencia de las libertades públicas e individuales.

En esta misma lógica, también son preocupantes:

- el tipo de liderazgo, organización y el nivel de conciencia de los diversos sectores sociales, políticos y culturales del país acerca de la importancia de definir la coyuntura actual dentro del proyecto país;
- la evolución que seguirá la actual coyuntura favorable al cambio y al desarrollo social de las mayorías en América del Sur con los liderazgos renovados en los Poderes Ejecutivos y sus movimientos de renovación estatal; y
- la evolución que seguirá la situación internacional más amplia, el receso económico y el tipo de disciplinamiento buscado por las economías regionales más poderosas, al margen de los movimientos internos que pugnan por un nuevo modelo de desarrollo viable y sostenible en términos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales.

PARAGUAY

Indicadores socioeconómicos 2001 - 2003

En guaraníes, dólares y porcentajes, según especificaciones

Producto Interno Bruto (PIB) en millones de dólares corrientes (2002)	5.391
PIB por habitante en dólares corrientes (2002)	977
PIB. Composición sectorial en porcentajes. Total (2002)	100%
Agricultura, ganadería, forestales, caza y pesca	23,6%
Industria, construcción y minería	18,70%
Electricidad, agua y serv. sanitarios, transporte y comunicaciones	11,60%
Comercio y finanzas, gobierno, viviendas y otros servicios	46%
PIB total. % de crecimiento interanual promedio (2001 - 2002) Guaraníes constantes 2000	-2,30%
PIB total. % de crecimiento anual promedio (1995 - 2002) Guaraníes constantes 2000	0,60%
Ingreso nacional total en millones de dólares corrientes (2002)	4.879
Ingreso neto por habitante en dólares corrientes (2002)	884
Salario mínimo legal desde febrero de 2003 en guaraníes corrientes	972.413
Salario mínimo legal en dólares corrientes a junio de 2003	156
Inflación interanual a abril de 2003 (21%) y julio de 2003 (12 %)	
Población total (Censo Nacional 2002) ⁵	5.516.391
Población económicamente activa (PEA) sobre población de 10 años y más (2002)	61,20%
Población económicamente inactiva (PEA) sobre población de 10 años y más (2002)	38,80%
Población ocupada 89.2% con desempleo abierto 11% sobre la PEA (2002)	
“Desempleo oculto, 11% de la PEI; subocupado, 25% de la PEA (2002)”	
Población pobre 24.2%, y pobre extremo 24.7% (2002). Total país	48,80%
Zona urbanas: pobre 28.0% y pobre extremo 18.1% (2002)	
Total zona urbana	46,10%
Zonas rurales. Población pobre 18.8%, y pobre extremo 33.5% (2002)	
Total zona rural	52,30%

⁵ Incluye ajuste censal, ver “DGEEC (2003). Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2002. Principales resultados, Paraguay” y es base de nuestra estimación del producto e ingreso por habitante.

Fuente: elaboración propia con base en Banco Central del Paraguay. Cuentas Nacionales 1992 - 2002. Informe económico de junio de 2003; DGEEC (2003). EPH 2002. Principales resultados. Evolución de la pobreza y la desigualdad.

Exportaciones totales de bienes, servicios y renta en millones de dólares (2002)	2.631,00
Importaciones totales de bienes, servicios y renta en millones de dólares (2002)	2.639,60
Saldo en cuenta corriente de la Balanza de Pagos en millones de dólares (2002)	107,3
Deuda externa pública. Saldo a junio de 2003 en millones de dólares corrientes	2,283
Servicio de la deuda externa pública pagado de enero a junio de 2003 en millones de dólares	112
Desembolsos del crédito externo de enero a junio de 2003 Millones de dólares	54,9
Transferencia neta de recursos externos a junio de 2003 en millones de dólares	-57,2
Activos de reservas internacionales. Saldo a junio de 2003 en millones de dólares	780
Tipo de cambio nominal, promedio a junio de 2003 Guaraníes= 1 dólar	6.225,00
Saldo de la deuda pública interna (c/ BCP) del saldo público no financiero en millones de dólares	344,3
Y en moneda nacional (a junio de 2003) mil millones de guaraníes	620,8
Saldo de la deuda pública interna del sector público financiero en mil millones de guaraníes	125
Déficit fiscal a diciembre de 2002 en millones de guaraníes	246.436
Déficit fiscal a junio de 2003 en millones de guaraníes	137.476